

Boletín de Información Agraria y Pesquera de Estados Unidos y Canadá

Oficina de Agricultura, Pesca y Alimentación
Embajada de España en Washington, D.C.

EL SENADO APRUEBA LA NUEVA LEY AGRARIA



Tras una sesión maratónica, el pasado 13.2.2002 el Senado estadounidense aprobó por 58 votos a 40 el proyecto enmendado de Ley Agraria sancionado previamente por la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta (ver Boletín n° 96). Esta Ley aprobada por el Senado es sustancialmente diferente de la aprobada el 5.10.2001 por la Cámara de Representantes (ver Boletín n° 90), por lo que ambas Cámaras deben ahora formar una conferencia mixta que alcance un texto consensuado para presentarlo a la firma del Presidente Bush. Aunque la identidad de los miembros de la conferencia aún no se ha anunciado, sí ha trascendido que el presidente de la misma será Larry Combest, Presidente Republicano de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes. Por esta Cámara, la conferencia presentará catorce delegados, ocho Republicanos y seis Demócratas, mientras que el Senado aportará cuatro Demócratas y tres Republicanos. El elevado número de miembros de la conferencia se debe a las grandes diferencias entre ambas versiones, cuya reconciliación requerirá largas y difíciles negociaciones.

El Senador Harkin, Demócrata de Iowa y Presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, ha anunciado que la prioridad de su partido es que el texto consensuado se presente a la firma del Presidente antes del 25.3.2002—comienzo del descanso de primavera—con el fin de que la ley pueda entrar en vigor cuando finalice la vigencia de la actual *Fair Act*, en octubre. La urgencia de este proceso se explica, asimismo, por las elecciones parciales al Congreso, que se celebran en noviembre de este año, en que los estados agrarios podrían decidir, en último extremo, las nuevas mayorías en ambas Cámaras.

Aunque varios senadores Republicanos han votado a favor de esta ley, ésta ha sido calificada de partidista por parte de la Administración. Con el fin de conseguir el apoyo de senadores conservadores, los Demócratas proponentes del proyecto de ley concedieron enmiendas que limitan el importe máximo de las ayudas, regulan el régimen de propiedad del ganado por parte de las plantas procesadoras de carne, así como los derechos de acceso al agua, y conceden una importante ayuda a los Estados del Nordeste con el fin de compensar por la eliminación progresiva del *North East Dairy Compact*.

Debido al corto plazo transcurrido entre la aprobación del proyecto de ley en el Senado y el cierre de este Boletín, es imposible hacer un

análisis en profundidad. De un modo preliminar, los aspectos más destacados de ambos textos son los siguientes:

Duración

El ley aprobada en el Senado tiene una vigencia de cinco años, mientras que la Cámara Baja aprobó su ley por diez años. Éste es uno de los aspectos más conflictivos de la versión del Senado. La generosidad de esta ley en el incremento de los precios objetivos desequilibra las previsiones presupuestarias aprobadas el año pasado para la próxima década (171.000 millones de dólares), al gastar más de la mitad de esta dotación en los primeros cinco años.

Ayudas a los sectores productivos

Ambas leyes mantienen la supresión establecida en la *Fair Act* de 1996 de los controles a la producción (libre elección de cultivos), así como la obligación de retirada de tierras (*set aside*).

Con respecto a las ayudas de los pagos contractuales y de las ayudas contracíclicas, ambas versiones incluyen todos los cereales, azúcar, cacahuetes y algunas oleaginosas. Se excluyen, al igual que en la *Fair Act*, las frutas y hortalizas.

En cuanto a cultivos concretos, es en este aspecto en el que surgen las mayores diferencias:

- Sector Lácteo: La versión del Senado concede pagos contracíclicos por valor de 2.000 millones de dólares a los Estados del Nordeste, para reemplazar el llamado *Northeast Dairy Compact*. La versión de la Cámara no incluye este concepto. Sin embargo, ambas versiones incluyen una cláusula que tasa las importaciones de lácteos, con el fin de financiar la *National Dairy Promotion and Research Board* (ver Boletines 94 y 99).
- Cacahuetes: Ambas versiones de la ley eliminan las cuotas de comercialización;
- Azúcar: Las dos versiones mantienen un programa similar al de la *Fair Act*.

Modulación de las ayudas

Una enmienda presentada por el Senador Chuck Grassley de Iowa limita el importe de las ayudas que una misma explotación puede percibir. Esta enmienda modula la percepción de las ayudas estableciendo un límite máximo

CONTENIDO:

El Senado aprueba la 1
nueva Ley Agraria

VISITE NUESTRO
SITIO WEB EN
WWW.MAPUSA.ORG

ESPAÑA 2002
Presidencia de la Unión Europea



de 225.000 dólares por explotación (275.000 en el caso de que los copropietarios sean matrimonio); el importe de ayudas directas y contracíclicas combinadas se limitaría a un máximo de 75.000 dólares por explotación, mientras que fija un máximo de 150.000 dólares para ayudas combinadas créditos de campaña/créditos a la comercialización. La versión de la Cámara Baja no contiene estos límites, a los que se han opuesto firmemente los productores de algodón y arroz, así como el *American Farm Bureau*.

Otras diferencias sustanciales entre las versiones del Senado y de la Cámara estriban en las cuantificaciones de los precios objetivos (mucho más elevados en la versión del Senado), así como de los tipos para la devolución de los créditos de comercialización de los distintos sectores productivos beneficiados.

Programas de exportación

Ambas versiones establecen presupuestos similares, 428 millones de dólares para el programa de restituciones a la exportación (*Export Enhancement Program*) y dotaciones similares para el Programa de Acceso a Mercados (*Market Access Program*), con especial énfasis en los mercados emergentes. Asimismo, ambas versiones renuevan el *Dairy Export Incentive Program*. Por último, tanto el Senado como la Cámara de Representantes proponen un programa de garantía a los Créditos de Exportación similar al ya existente en la Fair Act (5.500 millones/año)

Ayuda alimentaria internacional

Las diferencias entre las dos versiones son mínimas, proponiendo ambas presupuestos muy elevados. La versión del Senado dobla el límite anual de ayudas a 2.000 millones de dólares. Esta ayuda alimentaria, que ha sido objeto de denuncia por parte de la UE, se utiliza con frecuencia como ayuda doméstica encubierta y se pretende revisar en el marco de la OMC.

PUBLICADO POR LA
OFICINA DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
EMBAJADA DE ESPAÑA EN WASHINGTON, D.C.

2375 Pennsylvania Ave., NW
Washington, D.C. 20037
Teléfono: (1) 202-728 2339
Fax: (1) 202-728 2320
Correo electrónico:
mapausa@speakeasy.net

Ayuda alimentaria doméstica

Se mantienen los programas existentes. El Senado amplía el número de posibles beneficiarios, incluyendo a los inmigrantes, y duplica el presupuesto solicitado por la Administración para el programa de cupones de comida (*Food Stamps*).

Desarrollo Rural

La versión del Senado propone un presupuesto de 1.700 millones de dólares para 5 años, por 1.200 millones propuestos por la Cámara de Representantes para 10 años.

Política de Investigación

Ambas versiones aumentan el presupuesto para los *Land College Grants* (conciertos de investigación con universidades agrarias). El Senado aumenta la dotación para programas de investigación del USDA, e incluye una línea presupuestaria especial para actividades de bioseguridad y protección del suministro alimentario.

Política Forestal

Ambos proyectos renuevan los programas de reforestación, prevención de incendios, y utilización de biomasa. La versión del Senado promueve la utilización de energías renovables, especialmente etanol y energía eólica.

Programa de Higiene Alimentaria

El Senado propone crear una agencia líder en cuestiones de higiene alimentaria, la *Food Safety Commission*. Las competencias sobre higiene alimentaria están ahora mismo repartidas entre varias agencias federales.

Programa de conservación de agua

Una polémica enmienda añadida al proyecto del Senado establece un programa de conservación que obliga a ganaderos y agricultores a alquilar o vender sus derechos de acceso al agua al gobierno federal. Este programa ha levantado las iras de legisladores y agricultores de los Estados del Oeste.

Integración vertical del sector cárnico

Otra de las enmiendas más polémicas presentes en la ley aprobada por el Senado es la prohibición de que los propietarios de plantas procesadoras de carne sean, a su vez, dueños de ganado. Esta enmienda, presentada por el Senador Grassley de Iowa, tiene como finalidad la protección de las explotaciones porcinas de pequeño tamaño.

Ayudas de emergencia para sequía 2001

La Ley del Senado incluye, asimismo, una dotación de 2.400 millones de dólares en ayudas de emergencia a agricultores para paliar los efectos de la sequía de 2001.

Conservación y medio ambiente

La versión del Senado contempla un gasto de 22.000 millones de dólares en programas de conservación, en los que se incluye también a productores de frutas y hortalizas y a ganaderos. En la versión de la Cámara de Representantes la dotación se limita a 16.000 millones.

Algunos analistas ya han denunciado que las generosas ayudas previstas para los cinco años de vigencia de la ley agraria aprobada en el Senado podrían rebasar los límites de ayudas AMS (*Agregate Measure of Support*) pactadas en el seno de la Organización Mundial de Comercio. Asimismo, el nivel de gasto propuesto supera el límite aprobado en la Ley de Presupuestos para los próximos 10 años.

El carácter polémico y partidista de la ley aprobada por el Senado esta semana hace difícil prever el resultado de la conferencia mixta, y, en consecuencia, cuál puede ser el texto definitivo de la ley.

Las reacciones por parte de la administración Bush y de los líderes del Partido Republicano han sido principalmente negativas. Larry Combest, Presidente Republicano de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, y que presidirá asimismo la conferencia mixta, ha dejado ver que no está dispuesto a apoyar la ley en la forma aprobada por el Senado. Por su parte, el Presidente Bush ha destacado su descontento con el nivel de gasto en los cinco años de vigencia de la ley, aunque ha insistido en la voluntad de la administración de cooperar con la conferencia mixta para alcanzar un texto aceptable. Por su parte, el USDA, que siguió a distancia el debate de la ley en el Senado sin hacer pública ninguna propuesta concreta al respecto, planea mostrarse más activo en esta última fase del proceso. La Secretaría de Agricultura se ha hecho eco de las declaraciones del Presidente, manifestando su intención de colaborar con el Congreso en la elaboración de una ley de consenso que satisfaga las prioridades de la administración.